

Introducción

Cuando empecé esta investigación los PAU de Madrid eran prácticamente desconocidos. En el ámbito académico el asunto tampoco suscitaba mayor interés y solo un puñado de personas —desde el urbanismo, la geografía o la antropología—¹ habían escrito sobre ellos. Pues bien, los PAU —cuyas siglas provienen de la figura Programa de Actuación Urbanística— son un conjunto de barrios que se proyectaron durante la última burbuja (1995–2007) en las periferias de la ciudad de Madrid. Grandes desarrollos inmobiliarios, en lo que a extensión de terreno y número de viviendas se refiere, muy heterogéneos entre sí pero que comparten un diseño característico: su trama urbana dibuja una cuadrícula de grandes avenidas y urbanizaciones que, abarcando prácticamente el tamaño de una manzana, están cerradas sobre sí mismas y cuentan con diversos servicios privados en el interior. Algunas tienen piscina, pista de pádel, gimnasio, vigilancia veinticuatro horas y zona de juego infantil; y otras, como ya veremos, no tienen nada de eso. Las primeras reciben el apelativo de *residencial*, al que se le añade un nombre propio que identifica cada finca de propietarios: *Residencial Nuevo Carabanchel*, *Residencial El Pinar*, *Residencial Carabanchel Class*. Hacer acopio del repertorio de nombres existentes fue uno de mis grandes pasatiempos durante mi estancia en el campo. Como ya es posible sospechar, esta etnografía se desarrolla al sur de Madrid, cruzando el río Manzanares y la M-30, en el PAU ubicado en el distrito de Carabanchel. Este desarrollo se construyó como una prolongación de las antiguas tramas urbanas de los barrios colindantes, vecindarios populares que podemos englobar dentro de lo que se conocen como *periferias fordistas* o *periferias obreras*. Pero no quiero adelantarme. Por lo pronto diré que, a seis años de los primeros silabeos de mi investigación, escribo las últimas líneas de este trabajo con la sensación de que los PAU o los «nuevos ensanches», como empezó a llamarlos tiempo después la prensa, están cerca de haberse convertido en una categoría de uso común entre la población madrileña.

¹ El trabajo etnográfico de Sergio García García (2012) que aborda algunas dimensiones sociales del PAU de Carabanchel fue pionero en este sentido, constituyendo uno de los pocos acercamientos cualitativos a la realidad de estos nuevos barrios.

Me trasladé al barrio en septiembre de 2017. Y aunque pasé dos años en el PAU y viví en dos urbanizaciones distintas, siempre residí al borde de la misma avenida: la calle Tristes Trópicos.² Primero viví en el piso de Omar. Allí estuve once meses y tal vez debí haberme marchado antes. Y después en el piso de María, donde mis días fueron más tranquilos. Tiempo después de mi llegada al nuevo barrio, cuando entendí que ni la estancia en mi primera casa ni la vida en el PAU iban a resultarme fáciles, decidí titular mi diario de campo como «Tristes PAUs». Cualquiera podría pensar, a dos párrafos del inicio de esta etnografía, que siento una gran devoción hacia Lévi-Strauss, pero lo cierto es que los guiños a las obras colosales de la disciplina fueron más bien intentos desesperados por sobrevivir al que durante mucho tiempo sentí como el trabajo de campo más solitario, monótono y aburrido de la historia de la antropología. Como relataré con más detalle en el capítulo 2, experimenté unas grandes dificultades de acceso —fruto de la unión entre las particularidades urbanísticas y sociales del barrio, mis propias características sociológicas en ese contexto y mi condición de etnógrafa ajena al lugar— que me mantuvieron durante muchos meses en un estado de soledad y aislamiento, sin ser capaz de establecer relaciones con los vecinos y vecinas del barrio, más allá de los fríos saludos en el ascensor y el *holayadiós* en las salidas y entradas de las clases de pilates que se celebraban en mi residencial. En los primeros meses de campo mis únicas conversaciones dilatadas fueron con Yuri, el guardia de seguridad de mi urbanización, y con Awa, la mujer que trabajaba pidiendo dinero a la puerta del supermercado. Por suerte para esta investigación y para mi autoestima como antropóloga, poco a poco fui tejiendo más relaciones en el PAU, todas ellas con mujeres.

Cuando me encontraba en mi segundo año como vecina, los resultados de los distintos comicios electorales celebrados en la primavera de 2019 —las Elecciones Generales de abril y las Autonómicas y Municipales de mayo— lanzaron a los habitantes de los PAU al epicentro del debate mediático. La prensa y los especialistas de la opinión pública, en particular el sector comúnmente apodado como progresista o de izquierdas, comenzaron a hablar del fenómeno de los nuevos ensanches de Madrid: aquellos barrios de urbanizaciones en los que Ciudadanos (Cs) había cosechado amplias mayorías. Un partido político que, a falta de otro término más preciso, situaré en una derecha de corte liberal. Estas noticias y reflexiones de actualidad³ han difundido el

² Con el objetivo de proteger la identidad de las personas que aparecen en esta etnografía, he cambiado los nombres de las calles que circundaban las dos urbanizaciones en las que viví. Los he sustituido por otros que hacen referencia a etnografías clásicas de la historia de la antropología. Todas ellas implicaron arduos trabajos de campo en enclaves *exóticos*. Los nombres propios de las personas que protagonizan el trabajo también han sido modificados.

³ Véase: Plaza y Sánchez (2019, mayo 18), Dioni López (2019, mayo 15), Caballero (2019, junio 9) y Prieto (2019, julio 21) en el caso de las elecciones celebradas en abril y mayo de 2019. Para la repetición de las Elecciones Generales en noviembre de 2019 véase: Barraza (2019, noviembre 11), Prieto (2019, noviembre 12), Maestre (2019, noviembre 12) y Vicente Guisado y Pérez-Guzmán Arbáizar (2019, noviembre 13). Y para las últimas elecciones Autonómicas celebradas en mayo de 2021: Maestre (2021, marzo 23), Dioni López (2021, marzo 27) y Prieto (2021, mayo 11). Todas estas noticias y reflexiones publicadas en diferentes medios y plataformas digitales se analizan en profundidad en el capítulo 5.

mensaje de que irse a vivir a un PAU, en tanto barrio de urbanizaciones cerradas, conlleva progresivamente un aburguesamiento y la adopción de una ideología liberal o conservadora que se vería reflejada en el voto. Se representa a sus habitantes como jóvenes parejas con hijos pequeños que han adoptado un «estilo de vida» individualista y consumista, caracterizado por el aislamiento en la urbanización, la importancia de la seguridad, la preferencia por la educación privada y concertada, el endeudamiento para acceder a ciertas comodidades como irse de vacaciones o comprarse dos coches, o contar con las últimas novedades tecnológicas en el mercado. Las distintas argumentaciones parten de la misma ecuación: un barrio de urbanizaciones, piscina, coche y casa en propiedad genera necesariamente una ideología (neo)liberal y un grupo de población que, a través del consumo de esa forma de vida, desea ser clase media. Estas visiones mediáticas han terminado por convertir a los habitantes de los PAU en una suerte de retrato robot del votante medio y en el arquetipo de la llamada «clase media aspiracional» —un término que se coló en el debate a raíz de la popularidad de los análisis del escritor y periodista Daniel Bernabé (2018)—. Han fabricado así una representación esencialista que es ciega a la diversidad existente entre los diferentes barrios y a las distintas trayectorias sociales y residenciales de sus habitantes, y que además se apoya en un juicio hacia estos que discurre entre la victimización y la culpabilización.

Esta investigación se sitúa teóricamente en la intersección entre las transformaciones sociales y espaciales impulsadas por las políticas neoliberales, la configuración del espacio urbano y las dinámicas vinculadas con la clase y el origen social, pero aporta un análisis muy distinto al elaborado por este sector de la opinión pública. El debate mediático generado en torno a los PAU no fue nunca el punto de partida del trabajo ni tampoco el de llegada, pero sirve para aterrizar y condensar algunos planteamientos de la investigación en un debate social, concreto y actual, que tenía lugar durante su propio transcurso. En este sentido tomo las visiones de la prensa, de un modo si se quiere instrumental, para contraponer una elaboración conceptual alternativa del espacio urbano, de la clase social y, en general, de las prácticas sociales —en este caso protagonizadas por decisiones familiares económicas, residenciales y educativas—. Con ello albergo la esperanza de que, para quien lea este trabajo, al menos la mudanza al PAU de Carabanchel y las prácticas cotidianas que se tejen en la vida del nuevo barrio se revelen comprensibles. Que las visiones y decisiones de sus vecinas, con las que he trabajado, puedan pensarse como prácticas razonables en su contexto, fruto de unas condiciones sociales y no de otras. Que emerjan ante el lector o la lectora, incluso, como evidentes.⁴

⁴ No está de más aclarar que, aunque muchas de las cuestiones aquí expuestas encuentren resonancias en las realidades sociales de otros PAU madrileños, la etnografía toma como contexto de investigación el PAU de Carabanchel. De modo que los análisis y las conclusiones que se recogen en este trabajo no pretenden ser extensivos ni generalizables a todas las nuevas periferias urbanas, sino hacerse cargo —en su dimensión significativa— de la complejidad de la vida, en un momento y un tiempo determinados, en una de ellas.

La etnografía parte, como problema de investigación general, del largo proceso de transformación de la clase trabajadora y sus medios de reproducción impulsado a partir de los años setenta por las políticas neoliberales. En este marco, el Estado experimenta un movimiento de desresponsabilización en lo que a la provisión de bienes y servicios para garantizar la reproducción social se refiere, dinamitando poco a poco los mecanismos de aseguración colectiva y degradando y privatizando los bienes públicos y comunes. Se trata de un proceso que repercute directamente en las economías domésticas y en sus estrategias de reproducción, pues el peso de sostener las vidas de sus miembros y de garantizar el bienestar pasa cada vez más por el consumo y el endeudamiento privado. En nuestro país, la propiedad de la vivienda y su ubicación aparecen además en este escenario como recursos fundamentales para las clases trabajadoras.

FOTO 1. Vista aérea del PAU de Carabanchel, 2020 (Geoportal del Ayuntamiento de Madrid).



En este contexto, durante el pasado ciclo financiero-inmobiliario (1995-2007) se planificaron en Madrid como parte de una gran operación urbanística las *nuevas periferias urbanas* de los PAU o *periferias neoliberales*, como las denominaré en este trabajo —a partir de la conceptualización del colectivo Carabancheleando (2013a, 2017)—. En el caso de Carabanchel, como ya he dicho, el nuevo desarrollo se ubicó a continuación de los barrios de las periferias obreras pero marcando un contraste urbanístico y simbólico con ellas. Se levantó al lado de unos vecindarios diversos a nivel espacial, económico y sociocultural, que a mediados de los años noventa y principios de los dos mil estaban experimentando las políticas neoliberales aplicadas sobre unas poblaciones cada vez más precarias y heterogéneas.

El PAU comenzó a habitarse en torno al año 2006 por grupos de población con diferentes trayectorias sociales y residenciales, que fueron instalándose en los distintos tipos de urbanizaciones. De todos ellos, esta etnografía se centra en las

parejas jóvenes que crecieron en los barrios colindantes de la periferia obrera durante los años setenta y ochenta, y que en el *boom* se endeudaron para adquirir un piso en propiedad en un residencial del nuevo barrio. La mayoría a través de cooperativas de vivienda. Este grupo, que denomino hijos e hijas de la periferia obrera, traza una continuidad sociológica entre los dos espacios físicos y sociales aparentemente alejados.

Mi propuesta —y en este sentido la hipótesis del trabajo— consiste en entender su mudanza al PAU de Carabanchel como parte de un conjunto más amplio de estrategias para mejorar las condiciones de vida y la posición del grupo familiar: para tener una vida con más comodidades, una mayor *calidad de vida*. Lo que he etnografiado entonces son las estrategias prácticas que estos vecinos y vecinas despliegan en la cotidianeidad del nuevo barrio y las tensiones y múltiples vinculaciones a las que se encuentran sujetas. Aquí la movilidad residencial funciona como un paraguas que permite aglutinar diversas estrategias en el resto de ámbitos, como la socialización, el ocio o la educación de los hijos y las hijas. Mi interés, y mi objeto, reside entonces en las *estrategias familiares de reproducción y movilidad social* desarrolladas por este grupo social, aproximándome a ellas especialmente a través de las experiencias de las que fueron mis vecinas durante dos años: las mujeres del PAU.

Esta etnografía se compone de cinco capítulos que recorren un trabajo de investigación de más de cinco años y que se organizan de la siguiente manera. En las próximas páginas, como final de esta introducción, realizo una contextualización del objeto de estudio que ayude a situarlo en el curso de algunos procesos sociohistóricos y también en los debates teóricos sobre neoliberalismo, espacio urbano y reproducción social que se dan cita a lo largo del trabajo.

En el capítulo 1 propongo un breve recorrido por las transformaciones de las periferias de Madrid para intentar caracterizar lo que, en un ejercicio de simplificación analítica, denomino *periferias obreras* y *periferias neoliberales*. Aquí me detengo en el proceso de construcción de estas últimas y en los rasgos principales de su diseño urbano, para terminar adentrándome en el que fue mi barrio durante un tiempo: el PAU de Carabanchel.

El capítulo 2 presenta un viaje por las páginas de mi diario de campo con el objetivo de señalar algunas de las claves metodológicas y epistemológicas involucradas en la construcción de esta investigación etnográfica. En el capítulo doy cuenta, entre otras cuestiones, de las particularidades que rodearon mi acceso al campo y las relaciones que tejí con las vecinas, de los claroscuros del dispositivo metodológico que desarrollé, de algunas operaciones y procedimientos que se vieron implicados tanto en la producción de datos como en la elaboración conceptual, y también de los viajes que ha experimentado el objeto de estudio desde sus primeros bosquejos hasta el proceso de escritura. Al final dejo constancia de algunos límites, vacíos y vías a explorar que se quedan abiertas y que muestran hasta dónde ha sido posible llegar.

Ahora puedo confesar que todo el capítulo es en realidad un intento por justificar algo que apunta Jean-Pierre Olivier de Sardan (2018) y que resume a la perfección mi trabajo de campo: «es necesario haber perdido el tiempo, mucho tiempo, una enorme cantidad de tiempo sobre el terreno, para comprender que estos tiempos muertos eran tiempos necesarios» (p. 30). Supongo que desde que me enfrenté a la idea de elaborar lo que suele conocerse como capítulo metodológico, esta afirmación se convirtió en el hilo del que tirar para ir construyendo desde ahí, como capas de hojaldre, el resto de mi exposición.

El capítulo 3 es el más largo, y por eso le pido algo de paciencia al lector o lectora, porque constituye el corazón de esta etnografía: es aquí donde conceptualizo las *estrategias familiares de reproducción y movilidad social* y me centro en tres grupos de estrategias que los hijos e hijas de la periferia obrera despliegan en la cotidianeidad del nuevo barrio. Para ello dirijo la mirada a las experiencias de mis vecinas mujeres, tratando de mostrar a lo largo del capítulo cuál es la especificidad de género que presentan estas estrategias. En primer lugar, abordo el proceso de compra de la vivienda en un residencial y la elección del PAU como nuevo vecindario, intentando restablecer algunas de las condiciones de producción que rodearon esa práctica social y económica. En segundo lugar, exploro cómo se organizan la vida cotidiana y las relaciones vecinales al interior de las comunidades de propietarios. El conjunto de estrategias que se desarrollan en este ámbito guarda relación con la construcción de las urbanizaciones como espacios fundamentales de socialización en el barrio, donde además toma protagonismo la célula familiar. Aquí veremos las consecuencias que entraña para las mujeres que son madres esta expansión del espacio privado y doméstico. En tercer lugar, abordo las *estrategias educativas* que se desarrollan tanto en el ámbito residencial como en el escolar y por medio de las cuales las familias intervienen en el proceso de socialización de sus hijos e hijas. Tras adentrarme en múltiples situaciones cotidianas como las tertulias veraniegas al borde de la piscina, las clases de pilates en la sala de usos múltiples o los encuentros dominicales de un grupo de vecinas en torno a un club de lectura, termino este capítulo argumentando lo siguiente: las estrategias prácticas a las que me refiero están involucradas en una mejora de las condiciones de vida que hunde sus raíces en el espacio social y urbano de los barrios de origen. Esto es, en los barrios de la periferia obrera.

En el capítulo 4 abordo la dimensión de clase social que envuelve las estrategias familiares en el nuevo vecindario. Para ello me aproximo, primero, a las disposiciones sociales que los vecinos y vecinas despliegan en distintas situaciones y eventos cotidianos que se dan cita en el residencial. Me refiero a cuestiones tan dispares como la decoración de los espacios interiores de las viviendas, los temas de conversación en las charlas vecinales, las posturas corporales más discretas o las formas de hablar. Después, me intereso por los significados y las representaciones que las habitantes del PAU elaboran sobre su propia condición social y la de sus vecinos y veci-

nas, explorando sus posicionamientos. Aquí adquieren un papel relevante la noción de *clase media* y también las continuas ambivalencias y contradicciones que surgen en relación al barrio obrero de origen y a la periferia neoliberal.

Finalmente, en el capítulo 5 aventuro algunas conclusiones que se desprenden del trabajo. Aquí retomo las representaciones mediáticas elaboradas en torno a los PAU para debatir con las concepciones esencialistas y sustancialistas del espacio urbano y de la clase social que estas posturas defienden. Frente a las visiones que culpabilizan a la población de los PAU, que toman cada una de sus decisiones como nuestras inefables de la dominación capitalista y neoliberal —del triunfo del consumismo y el individualismo—, propongo que es posible analizar las prácticas familiares que orbitan en torno a la mudanza a un PAU como estrategias orientadas a la reproducción social. Es decir, como un conjunto disperso y no coherente de estrategias prácticas que, en este caso, una generación de nacidos y nacidas en la periferia obrera madrileña tiene al alcance para mejorar su vida y la de las generaciones venideras en un contexto urbano, no lo olvidemos, caracterizado por la precariedad, la competitividad y la ausencia cada vez más acuciante de recursos públicos y mecanismos de aseguración colectiva.

Acabo estas líneas introductorias dando paso a una etnografía que empieza *donde las periferias cambian su nombre*. Allí donde «los que venimos de barrio», como me decía una de las vecinas del PAU, se fueron a vivir.

1. UN LARGO PROCESO DE TRANSFORMACIÓN. CLASE OBRERA, REPRODUCCIÓN SOCIAL Y NEOLIBERALISMO

El neoliberalismo puede entenderse como un proyecto político (Harvey, 2005; Wacquant, 2012) que pretende dar respuesta, a partir de los años setenta, a dos fenómenos interrelacionados: la decreciente rentabilidad de las industrias de producción masiva y la crisis del Estado de bienestar keynesiano y sus relativas garantías sociales. Esto es, la crisis del sistema de acumulación fordista y sus formas de regulación. El neoliberalismo se presenta así como un proceso capaz de restablecer las condiciones favorables para un nuevo régimen de acumulación y restaurar el poder de clase de las élites económicas (Harvey, 2005).

Según Loïc Wacquant (2010; 2012), uno de los rasgos más novedosos sería el cambio en la orientación del Estado. En el capitalismo industrial, el Estado asumía un rol mediador o regulador en el conflicto capital-trabajo, desplegando ciertas garantías sociales en forma de servicios públicos, cuidando de los salarios y poniendo restricciones al mercado. Cuestiones que se aseguraban, en parte, gracias a la vigilancia del movimiento obrero y otras formas de organización colectiva que gozaban de más capacidad de presión y negociación y de un mayor arraigo en el cuerpo social.

Esta suerte de *pacto social fordista* actuaba no solo en el plano del trabajo asalariado —como medio de acceso al consumo, al bienestar y a la reproducción de la vida—, sino también en la generación de derechos y de acceso a la ciudadanía⁵ (Alonso, 2010), existiendo un acuerdo más o menos generalizado en la intención de sacar la miseria y la precariedad de la vida. El proyecto político neoliberal emerge como una forma de reconstruir este nexo entre el mercado, el Estado y la ciudadanía, buscando el fortalecimiento y la expansión de las lógicas del mercado y el capital. Por seguir la formulación de Wacquant (2012), lo «neo» del neoliberalismo residiría entonces en el rediseño y redespliegue del Estado para imponer al mercado; empleando su capacidad para elaborar las leyes y moldear las subjetividades, las relaciones sociales y las representaciones colectivas para hacer realidad la disciplina de mercado.⁶

De forma general, en la acción de este Estado neoliberal se articulan al menos tres dinámicas. Primero, la *desregulación*, entendida como una re-regulación destinada a promover el mercado y sus lógicas —competición, fragmentación, prestigio de lo individual, mandato de la productividad, etc.— como principios para organizar la diversidad de actividades humanas. En maridaje con esta centralidad del mercado en

⁵ Sin embargo, no conviene magnificar la capacidad inclusiva o integradora de la sociedad fordista-keynesiana. Fuertemente asentado sobre el trabajo productivo formal, remunerado y masculino, como elemento que vehiculaba no solo los medios de vida sino también la ciudadanía y la participación en la sociedad, en este modelo numerosos grupos sociales quedaban marginados y contruidos como minorías por razón de edad, género, procedencia, origen étnico, ocupación, orientación sexual, etc. Aquellas actividades y sujetos que en el imaginario social no se consideraban como contribuidores a la formación de la propiedad social eran relegados a un lugar subordinado (Alonso, 2010). Y, a consecuencia de la violencia simbólica y material impuesta por el *orden de las cosas*, permanecían invisibilizados y discriminados a nivel material y de derechos. Hablamos de las mujeres, las disidencias de género y de orientación sexual, los jóvenes, las actividades de la economía informal o de subsistencia, o de grupos históricamente estigmatizados como los gitanos y gitanas. Los análisis y reclamos elaborados por las feministas desde épocas tempranas muestran cómo la regulación del Estado de bienestar fordista se articulaba sobre un modelo de familia patriarcal y heterosexual que, además de reforzar el control y la subordinación de las mujeres, se aprovechaba de su trabajo reproductivo no pagado (Dalla Costa, 2009; Federici, 2013; Pérez Orozco, 2014). El epicentro de la sociedad era el hombre nacional, adulto, cotizante y contribuyente, empleado en el trabajo formal, heterosexual —o al menos en apariencia—, cabeza de familia y suministrador de seguridad económica y social a todos los sujetos que por género y edad estaban subordinados a él.

⁶ Es importante matizar que no entiendo el neoliberalismo como un proyecto coherente, acabado y homogéneo que se aplica a través una guía rectora en todos los lugares por igual. Me gustaría rescatar el concepto de *neoliberalismo realmente existente* (Theodore, Peck y Brenner, 2009) para señalar que, en contraposición a esa primera aproximación, el capitalismo es un conjunto de relaciones sociales históricamente articulado: un proceso territorialmente arraigado e impulsado mediante la acción política ensamblada de una forma concreta en cada lugar, en función de la conformación y la trayectoria específica de los marcos institucionales locales, las políticas estatales, las particularidades socioculturales y los conflictos políticos y sociales sucedidos a través del tiempo. Así, este concepto llama la atención sobre dos elementos. Primero sobre la dimensión de inserción contextual y multiescalar, y segundo, sobre la dimensión procesual. El neoliberalismo, más que un proyecto coherente y acabado, sería un proceso continuo, inestable y heterogéneo de transformaciones sociales, que explota y al mismo tiempo produce diferencias socioespaciales —de las que, por cierto, se alimenta—. En esta línea, también resulta necesario problematizar las visiones monolíticas sobre el propio Estado neoliberal. Loïc Wacquant (2010), citando a Bourdieu y su noción de «campo burocrático», recuerda que el Estado no debe entenderse como una formación unívoca, coordinada y armónica, sino como un campo de luchas sociopolíticas. Un espacio donde distintas fuerzas rivalizan por la definición y distribución de los bienes y las políticas públicas.

la vida aparece el impulso por la «mercantilización de todas las cosas», que dice la antropóloga Dolors Comas (1998), como el principio mediante el cual todo puede ser tratado como una mercancía. Segundo, los ataques al trabajo y la flexibilización del mercado laboral promueven una fragmentación e individualización de la relación salarial y, al tiempo que empeoran las condiciones laborales, consolidan los fenómenos del desempleo estructural, la precariedad y la falta de estabilidad. En paralelo, la retracción de la acción social del Estado supone un abandono del principio de redistribución para fomentar la privatización y la mercantilización de los recursos y los bienes comunes y públicos. Todo ello desemboca en una progresiva destrucción de las protecciones colectivas y en una desresponsabilización del Estado en la provisión de los servicios elementales para sostener la vida. Es decir, una desresponsabilización del Estado en la reproducción social. El resultado es un escenario de precarización de la vida donde la precariedad se convierte, como argumentan Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández (2013), en una herramienta disciplinaria y en uno de los ejes centrales del modo de regulación capitalista actual. En tercer lugar, hay algo que surge como una consecuencia lógica de este abandono de la responsabilidad social del Estado: el principio de responsabilidad individual y de búsqueda de soluciones atomizadas. Para las clases trabajadoras la acción combinada de la desregulación del mercado de trabajo y el retroceso del Estado social deja pocas opciones en lo que a medios de vida se refiere. La provisión de bienes y servicios básicos pasa, además de por la sumisión al empleo flexible, por estrategias cada vez más atomizadas y centradas en el consumo y el endeudamiento familiar. En el caso de las capas más bajas del proletariado urbano esto se combina, además, con una expansión del control punitivo⁷ que va desde el viraje en las lógicas de la asistencia social, hasta la policialización y la judicialización de la desigualdad (Wacquant, 2010; Ávila y García, 2015; Moreno Robles, 2021).

Lo que me interesa especialmente es el vínculo entre estas lógicas que van penetrando en las políticas públicas desde los años setenta y su relación con la *solución financiera* y la *solución espacial* —por emplear la terminología de David Harvey (2012) [2000]— que propone el neoliberalismo a la crisis de acumulación fordista-keynesiana. La primera cuestión tiene que ver con la centralidad que adquieren los mercados financieros en la economía internacional y también en la vida cotidiana. Mientras que la segunda se refiere a la necesidad que tiene el capitalismo de reorganizar la geografía y el espacio para llevar a cabo sus procesos de acumulación. Mediante las intervenciones en el espacio construido —como la proliferación de viviendas, infraestructuras,

⁷ De ahí que Loïc Wacquant (2010) hable de un «estado centauro»: un estado mínimo en la cúspide de la jerarquía social que practica el *laissez faire* eliminando barreras y restricciones a la movilidad del capital y a los grupos dominantes, y que sin embargo se vuelve más intervencionista y autoritario a medida que descendemos por la estructura social. Penetra en las regiones más bajas del espacio social y urbano para contener los efectos generados por la profundización de la desigualdad.

redes de transporte y grandes operaciones inmobiliarias— se consiguen movilizar los capitales excedentes que quedan atrapados en las crisis de sobreacumulación (López y Rodríguez, 2013). Ambos procesos, el financiero y el inmobiliario, discurrieron de la mano en el Estado español durante el ciclo de la pasada burbuja (1995–2007), convirtiéndose en sus grandes pilares. Además, desde el punto de vista del proceso de desresponsabilización del Estado, han jugado un papel esencial en la provisión de bienes para la reproducción social: la dupla financiero-inmobiliaria ha contribuido a la penetración del mercado, las finanzas y las lógicas neoliberales en las economías domésticas, adquiriendo un lugar importante en las estrategias familiares de reproducción de la clase trabajadora y promoviendo las soluciones atomizadas que pasan por el consumo y el endeudamiento de los hogares.

Sobre los mimbres de estos arreglos entre el capital y el espacio emerge también el modelo de *ciudad neoliberal*, como una forma de organizar y reestructurar el espacio urbano a través de intervenciones políticas (Theodore, Peck y Brenner, 2009; Harvey, 2013). Se trata entonces de una construcción social —espacial y temporal— que surge de la aplicación de las características del neoliberalismo al desarrollo urbano; y en este sentido podemos conceptualizarlo como parte de la reorganización del Estado de la que habla Wacquant (2012). Así, teniendo en cuenta la dinámica de expansión del mercado y el restablecimiento de las condiciones para la acumulación del capital, las ciudades constituirían un espacio social privilegiado para territorializar y encarnar, en la vida cotidiana y los cuerpos de sus habitantes, este proyecto internacional a través de las políticas urbanas.

Como veremos a lo largo de esta etnografía, el modelo de ciudad neoliberal que se consolidó en España durante el ciclo 1995–2007 ha producido múltiples cambios tanto en la fisonomía territorial de las ciudades como en las dinámicas sociourbanas, transformando los barrios y los espacios de vida de las periferias obreras. El capitalismo, como sistema económico y social, necesita de la existencia de un paisaje material, una geografía del capital —un entorno construido a imagen propia—, que resulte funcional a sus propósitos de producción y reproducción. Por ello, los procesos de neoliberalización en curso en las ciudades no implican solo la mercantilización del espacio urbano, como si de un trozo de tierra intercambiable se tratase, sino también un impulso por reorganizar las relaciones sociales y los modos de socialización. Por ejemplo, introduciendo en el espacio físico y social dinámicas de competitividad e individualización, los principios de inseguridad y escasez, o reforzando la disolución de las solidaridades y la expansión de lo privado. Como mostraré en los siguientes capítulos, los barrios que se construyeron durante el *boom* inmobiliario en las nuevas periferias de las ciudades son, en parte, producto de esta transformación física y social estimulada por las políticas urbanas del capitalismo flexible.

Así, los cambios políticos, económicos y sociales impulsados por las medidas neoliberales a partir de los años setenta motivaron no solo las dinámicas de desin-

dustrialización, cambio productivo y desregulación del mercado de trabajo, sino también una transformación multidimensional de la sociedad en su conjunto. El proceso de neoliberalización ha permeado todas las esferas de la vida generando, allá donde fuera posible, una reorganización de las relaciones en favor de los mecanismos de acumulación flexible: en el consumo, la enseñanza, las formas de organización colectiva y de subjetivación política, las intervenciones en el espacio urbano, las comunidades vecinales y hasta en los afectos. En este marco se inserta el largo proceso de transformación de la clase trabajadora que acompaña la ruptura de los medios de vida y de las representaciones colectivas de este grupo: los medios y los modos para mantenerse y para pensarse. Un fenómeno que algunos autores y autoras conciben incluso como una ruptura de sentido al quedar obsoletos los instrumentos tradicionales de reproducción y representación colectiva (Bourdieu, 1999 [1993]; Sennett, 2001 [1998]; Beaud y Pialoux (2015) [1999]). En la investigación coral *La miseria del mundo*, Pierre Bourdieu (1999 [1993]) alude a esta desestructuración del universo obrero tradicional como el «fin de un mundo», refiriéndose con ello a la crisis de sentido experimentada por los sujetos de clase trabajadora y cuyos efectos pueden rastrearse a través de las distintas generaciones hasta la actualidad. Como no podía ser de otra manera, este proceso de transformación discurre junto con la metamorfosis de los espacios de vida. Los barrios y vecindarios obreros y populares se complejizan sociológicamente —adoptando por ejemplo la diferencia nativo-migrante como división social que tiende a sustituir las oposiciones construidas en torno a la clase— al tiempo que se suceden cambios físicos en el entorno construido.

En esta etnografía me aproximo a las *estrategias familiares de reproducción social* (Bourdieu, 1991 [1979], 2002 [1994], 2018) de los hijos y las hijas de esta crisis del universo obrero y sus modos de reproducción. Me aproximo a esa generación que era niña cuando la España de los años setenta y ochenta se sumía en una profunda crisis económica y social, al tiempo que un repertorio de cambios institucionales y productivos ponían en marcha, poco a poco, un capitalismo neoliberal —sobre la base de una nueva democracia y un débil Estado de bienestar—. Se trata de la generación que nació en los barrios de las periferias, donde las economías domésticas eran casi tan precarias como los servicios y equipamientos públicos, y que creció y se hizo adulta de la mano de unas políticas neoliberales que progresivamente iban transformando la sociedad y también aquellos antiguos barrios obreros. Unos vecindarios, ya de partida heterogéneos, que fueron complejizándose en relación a las múltiples procedencias y niveles de vida de sus habitantes —ya no solo provenientes de todos los rincones del territorio nacional, sino también del mapa internacional—, y que acogieron en su seno un nuevo abanico de expectativas y de trayectorias sociales familiares. En ellos fue penetrando el principio neoliberal de la escasez para fomentar los procesos de inclusión diferencial, la fragmentación de los vínculos comunitarios

y la búsqueda de soluciones individuales (García y Ávila, 2015). Me refiero a la generación de chicos y chicas de barrio que, de acuerdo con el orden de las cosas, cuando llegó a la veintena estaba lista para endeudarse y comprar una de las viviendas del *boom* inmobiliario.

1.1. «Vamos a más»: del desarrollismo franquista a la última burbuja

En el Estado español este proceso sociohistórico, primero la conformación de la sociedad de consumo y más tarde el paso a un orden postfordista y neoliberal, está teñido de particularidades —Alonso y Fernández Rodríguez (2020) aportan un análisis detallado de ello—. La debilidad que presentó desde sus inicios el tejido industrial, el predominio de otras actividades productivas como el turismo y el sector inmobiliario, la dilatada dictadura franquista o la emergencia de un precario Estado de bienestar que echó a caminar prácticamente al unísono de las nuevas políticas neoliberales son algunos de sus rasgos característicos. Todo ello teniendo en cuenta la posición semiperiférica del país tanto en el viejo contexto industrial europeo como en su posterior reorganización neoliberal. Con la intención de dibujar un marco general que sitúe y contextualice el objeto de la etnografía en el tiempo histórico, voy a repasar sucintamente estos elementos basándome en el análisis que realizan Isidro López y Emmanuel Rodríguez (2010) del régimen de acumulación español desde los años sesenta. Lejos de realizar un examen detallado de la cuestión, algo que escapa a mis posibilidades, en este recorrido me detengo especialmente en aquellos elementos que envuelven los procesos de acumulación *en y mediante* el territorio. Hay entonces un interés particular por la vivienda y el sector inmobiliario, y su entronque con las economías domésticas obreras y sus diferentes estrategias de reproducción.

En España la implantación de los mecanismos de acumulación y regulación típicamente fordistas estuvo marcada por una larga dictadura y por un sistema industrial deficiente que presentaba un alto grado de dependencia de la tecnología y la inversión extranjeras. Desde una época temprana este modelo industrial convivió con procesos de acumulación relativamente anómalos en el contexto fordista-keynesiano de la época. El país se especializó en el turismo de masas, presentándose como el lugar ideal de veraneo y descanso para turistas europeos, gestando así un flujo de entrada para las divisas internacionales. Esta actividad económica, que pronto se convirtió en la primera, tuvo dos efectos: el rápido proceso de terciarización de la economía española y la dinamización de la construcción y el sector inmobiliario.

En los albores de los años sesenta —con el Plan de Estabilización de 1959— la dictadura franquista emprende una cierta apertura hacia la economía de mercado con una retórica marcada por la *mitología desarrollista*, la modernización y el progreso. La entrada de capital y de tecnología extranjera activa el crecimiento de la produc-

ción industrial, la salarización y se pone en marcha una tímida *norma de consumo obrero* (Ortí, 1987), caracterizada por el relativo acceso entre las clases trabajadoras a bienes como la vivienda, el automóvil, los electrodomésticos y otros equipamientos para el hogar. Esta cuestión no debe desvincularse de la clara apuesta de la dictadura, desde años antes, por la promoción de la vivienda en propiedad entre la clase trabajadora. En 1957 se había creado el Ministerio de la Vivienda con José Luis Arrese a la cabeza, el encargado de llevar a cabo el proyecto político franquista de convertir España en un «país de propietarios, no de proletarios». Dio comienzo entonces una política de largo recorrido, que ha llegado hasta nuestros días, centrada en la promoción de la vivienda libre y en propiedad —en detrimento de la vivienda social y el alquiler— y acompañada de una escasa regulación de la propiedad privada y la actividad inmobiliaria (Naredo y Montiel Márquez, 2011).

Esta apuesta por la compra de viviendas resultó ser una vía para integrar a una parte importante de la población, aquella que iba ganando poder adquisitivo en los sesenta. Pero no solo eso: incentivar el concepto de propiedad entre la ciudadanía constituyó una forma de sujeción y reproducción social central en la nueva etapa capitalista que se estaba fraguando en el país (Aricó, 2016). Tanto es así, que la vivienda en propiedad continúa siendo el elemento de seguridad por antonomasia para la organización de las economías domésticas obreras. Estimular la compra de la vivienda como elemento básico de pertenencia, sobre todo entre las clases trabajadoras, resultó una forma de vincular a la población de forma estable con la nascente sociedad de consumo, convirtiéndolos en propietarios.

De hecho, es durante la dictadura cuando se ponen en marcha dos cuestiones que se van a sedimentar en las sucesivas políticas de vivienda: el fomento de la propiedad inmobiliaria desde la vivienda protegida y de promoción pública, impulsando las opciones de compra, y la promoción del modelo de iniciativa privada como principal agente urbanizador del país. En relación con esto último, el desarrollo del urbanismo de urgencia durante los años sesenta y setenta como consecuencia de la llegada de inmigrantes rurales a las ciudades, y la necesidad de construir polígonos y barrios de vivienda obrera en las periferias urbanas, se utilizó para crear un generoso nicho de beneficios para el sector privado. Gracias a la construcción de viviendas protegidas, las subvenciones y los apoyos fiscales, no solo se consolidó un modelo de iniciativa privada que iba a perdurar, sino que se formó un grupo de constructoras y promotoras que han sobrevivido hasta la actualidad como grandes grupos empresariales del país.

Según Alfonso Ortí (1987), durante la etapa final del franquismo se consumó una *socialdemocratización material*, es decir, una *norma de consumo obrero* entre unas capas populares con bajos niveles de vida, integrándolas material e ideológicamente en el modelo de la llamada *sociedad de consumo* y de las clases medias —con todas sus particularidades en el caso español (Alonso y Fernández Rodríguez, 2020)—. Todo ello

servió para acomodar una estructura social jerárquica a los cambios políticos y del sistema productivo, encubriendo una reactualización de las desigualdades sociales con el discurso de la igualdad, la movilidad social y la modernización. Según Ortí, se trataba de construir una nueva *clase media* tan socialmente heterogénea, en el sentido de composición social, como simbólicamente homogeneizante: los estratos superiores de la sociedad unidos a través de una misma categoría con grupos de clase trabajadora, que a su vez emprenden una lucha por diferenciarse y escapar de las condiciones de vida de la clase obrera. Una dinámica social que afloraba en los grupos de discusión del momento realizados por el propio Alfonso Ortí bajo el expresión «vamos a más».⁸ En palabras del autor (1987: 734-735):

La celebrada ampliación de las clases medias de los años sesenta ha sido fundamentalmente un proceso de ampliación de sus estratos inferiores, mientras sus capas superiores casi no han experimentado variación alguna. [...] Es decir, el proceso de desarrollo económico y la «fortificación» del «centro sociológico» se han consumado mediante la extensión de los escalones intermedios inferiores, pero sin afectar al carácter extremadamente minoritario de las clases medias altas españolas, más próximas o integradas con los círculos [...] del poder y del capital.

La construcción de esta subjetividad de clase tiene cierta importancia desde el punto de vista del Estado (Rodríguez, 2016), pues funciona como una suerte de *consenso*: una asunción colectiva en torno al advenimiento de una sociedad igualitaria, a la desaparición de las antiguas fracturas y el conflicto, e incluso a la desaparición de las clases sociales. De algún modo, situarse en la clase media es bastante parecido a no situarse en ninguna clase, como si esta permitiera sortear la estructura de desigualdades a la que aluden otras categorías como *clase obrera* o *clase trabajadora*. Se activa entonces un imaginario de progreso, convivencia, igualdad de oportunidades y movilidad ascendente que refuerza la propia estabilidad del Estado, necesitado de un cuerpo social y electoral que confíe en sus valores democráticos, y convierte ese

⁸ Esta misma formulación que Alfonso Ortí veía repetirse en un grupo de discusión realizado con perfiles de «clase media baja madrileña» en el invierno de 1979, fue utilizada posteriormente por el Partido Popular (PP) en varias campañas electorales. Una coincidencia en la que reparó mi amigo David Prieto. Desconozco si fue o no fruto de la casualidad pero este mismo sintagma, «vamos a más», se convirtió en el lema de campaña de José María Aznar en las elecciones del año 2000, comicios que ganó con una rotunda mayoría. Pero la historia no se detiene aquí. Cuatro años más tarde, aún en plena fase ascendente de la burbuja inmobiliaria y financiera, Mariano Rajoy volvió a utilizarlo para su candidatura electoral, esta vez con una ligera modificación: «juntos vamos a más». La consigna no solo le valió al Partido Popular un rifirrafe con la Caja de Ahorros de Sevilla y Huelva, que utilizaba exactamente el mismo eslogan para promocionar una línea de productos financieros (Servimedia, 2004, febrero 26), sino que mucho tiempo después se descubriría que el lema en sí fue un subproducto de la trama Gürtel. Una de las empresas del entramado societario de Francisco Correa se asoció con una conocida firma de publicidad para diseñar varias campañas del PP, entre ellas la del 2004 (Fernández, 2016, octubre 25).

fenómeno que llamamos clase media en una categoría de pertenencia fundamental entre la población. Por eso, para Alfonso Ortí (1992), la expansión de las clases medias puede entenderse como un proyecto de estabilización sociopolítico cuyo objetivo reside en la formación de un grupo social —que a la vez actúa como un imán para las capas más desfavorecidas de la población— al que se le atribuye una función mediadora —él matiza: mediadora entre el capital y el trabajo—. Esto tiende a convertir a las clases medias en el lugar de objetivación del *consenso*, aglutinándose en torno a unos valores cívicos comunes y encubriendo sistemáticamente las desigualdades y el conflicto social. Según Ortí, lo que en la literatura sociológica se ha conocido como «sociedad de clases medias» o «sociedad de dos tercios» no significa ninguna superación radical de la desigualdad. Por el contrario, al negar la existencia de clases, pues todas las personas serían de una clase media convertida en universal, lo que realmente universaliza es la desigualdad.

Así las cosas, la llegada en 1973 de la crisis internacional se recibe en España, desde su posición semiperiférica en el sistema industrial, en un contexto marcado por la relativa incorporación de las clases trabajadoras al consumo, la crisis final de la dictadura franquista y una activa respuesta obrera y popular. Por eso los efectos de la crisis del petróleo no se hacen patentes hasta al menos 1975, cuando da comienzo la oleada de quiebras en el sector industrial, las suspensiones de pago y los despidos. Al tiempo que la crisis se vuelve más evidente, se afianza la transición política y económica del país y en 1977 se firman los Pactos de la Moncloa, acuerdos que sientan las directrices para el nuevo modelo socioeconómico. En esta empresa fue necesario comprometer a los sindicatos mayoritarios y afianzar los consensos cooptando o destruyendo a las disidencias políticas de todo el territorio, y en definitiva, sellando con un pacto de silencio el conflicto social y la historia pasada. Aunque los pactos contemplan una expansión de los principales servicios básicos como la educación o la sanidad, su eje central consiste en la política de rentas y el control de la inflación (López y Rodríguez, 2010). Es decir, los salarios pasan a estar subordinados a la inflación prevista, dibujando a partir de entonces una curva descendente. Algo que en la práctica supone una restricción salarial y el abandono del objetivo del pleno empleo, o dicho de otro modo, la reducción de los salarios y el aumento del desempleo. Esta dinámica se ve reforzada por una restructuración paralela del mercado de trabajo. De acuerdo con los principios de la flexibilización laboral se introducen figuras como los contratos en prácticas y en formación, se rebaja la duración y la cuantía de la prestación por desempleo, se legalizan las empresas de trabajo temporal, se flexibilizan las condiciones de despido y se favorecen los contratos temporales. Todo ello abre la puerta a una creciente precariedad e inestabilidad en el empleo y en la vida.

En 1979, con la segunda crisis del petróleo, el paro no hace sino aumentar. Se suceden las leyes de Reconversión y Reindustrialización —primero la de Unión de

Centro Democrático (UCD) en 1981 y en 1984 la del PSOE— y las medidas de gasto público para recuperar a las empresas se implementan desoyendo los problemas estructurales que el modelo industrial arrastraba desde el desarrollismo. Sin embargo, según Isidro López y Emmanuel Rodríguez (2010), mientras el contexto de crisis refuerza la posición subordinada de la economía española en la nueva división internacional del trabajo, el sector bancario del país se ve fortalecido. Los grandes grupos económicos nacionales se beneficiaron de la situación en el plano financiero gracias, entre otras cosas, a las medidas de liberalización del sector bancario.

En el plano social las consecuencias de los más de diez años de crisis fueron devastadoras. El fenómeno del paro es masivo y se ceba especialmente con el sector industrial y el de la construcción. Entre los jóvenes que se incorporan en esa época al mercado de trabajo el desempleo es casi generalizado. La destrucción del empleo, la degradación de las condiciones laborales y la disminución del nivel de renta, unidos al incremento proporcionalmente mayor del coste de la vida en las grandes ciudades, hace que la pérdida de poder adquisitivo se viva de forma más aguda en los grandes núcleos urbanos (Fernández Durán, 1985). En este contexto, tal y como retomaré en el capítulo 1, acontece un fenómeno de división y fragmentación social que echa raíces en los barrios obreros de las periferias (Carmona y Rodríguez, 2007; García, 2012). Se incrementan las diferencias económicas y simbólicas entre personas ocupadas y paradas, entre empleados públicos y asalariados del sector privado, entre trabajadores y trabajadoras de las grandes empresas y de las pequeñas. Distancias todas ellas que resultan perceptibles en la vida cotidiana de los barrios y de las familias. Emergen los dramas silenciosos, especialmente masculinos, en los que la ruptura de trayectorias laborales estables y de largo recorrido desembocan en crisis personales, en frustración y a veces en violencia. Se refuerzan también las largas jornadas de trabajo femenino, que con frecuencia encabalgan el trabajo en casa con empleos domésticos o de costura para llegar a fin de mes, casi siempre en la economía informal. Mientras tanto, el precario espacio público de los barrios se llena de una generación de jóvenes expulsada del sistema educativo, sin recursos, sin posibilidad de independizarse y, especialmente entre los varones, con expectativas laborales frustradas (Gamella, 2001 [1990]). Las antiguas trayectorias laborales lineales, muchas veces heredadas de padre a hijo, que garantizaban la incorporación temprana de los jóvenes de clase obrera al mercado laboral ya no son una garantía. Tampoco sus aprendizajes en el universo doméstico y barrial son útiles en la escuela, todo lo contrario. En ese mismo espacio público, en el de unas periferias levantadas con urgencia sin apenas equipamientos y servicios públicos, las mismas que vieron nacer al movimiento vecinal, entra con fuerza la heroína para apuntalar una espiral de sufrimiento social y fragmentación.

Las políticas de corte neoliberal, cuyo marco se asienta con los Pactos de la Moncloa, se refuerzan durante los primeros gobiernos democráticos. El resultado es

que los costes de la larga crisis se trasladan a los sectores más vulnerables de la sociedad y, de nuevo, los salarios se convierten en el objetivo de las medidas de recorte de gastos, para aumentar los beneficios y la competitividad del tejido empresarial. El Estado, poco a poco, deja de asumir la dinamización del desarrollo industrial y se dedica a proteger los sectores estratégicos de los principales capitales nacionales, como la banca, la construcción y las grandes empresas energéticas (López y Rodríguez, 2010). Aunque durante la década de los ochenta se desarrolla un tímido Estado de bienestar que pone en marcha políticas sociales fundamentales como la universalización de la seguridad social y la expansión de servicios como la educación y la sanidad —y también del funcionariado y el empleo público—, su desarrollo se encuentra limitado casi desde el principio. Muestra de ello es que a partir de 1982, con el gobierno del PSOE, se efectúa un estancamiento del gasto social que viene para quedarse.

Merece la pena detenerse en algunos acontecimientos que, a finales de los ochenta y principios de los noventa, se apoyan sobre estas políticas precedentes e impulsan un abanico de dinámicas que resultan fundamentales para la burbuja que años más tarde recorrerá el territorio. Se trata de un ciclo de crecimiento en el que se ensaya lo que se repetirá de forma ampliada durante el *boom* inmobiliario de 1995–2007: a partir de políticas que inciden en la desregulación de los ámbitos financiero e inmobiliario, y por tanto en pos de la movilidad del capital, se va fraguando una estrategia de acumulación basada en las rentas financieras e inmobiliarias (López y Rodríguez, 2010; Observatorio Metropolitano de Madrid, 2013).

En 1986 España entra en la Comunidad Económica Europea —la actual Unión Europea—, desplegando una retórica articulada sobre los valores de la *modernización* y el *progreso*. Esto facilita la incorporación del país a una economía internacional en un momento en el que van tomando centralidad los mercados financieros. Las lógicas neoliberales de la financiarización empiezan así a penetrar con más intensidad en el panorama económico nacional y las políticas del momento son un reflejo de ello. La mayoría de medidas que se aplican en el ámbito inmobiliario —y que en algún caso repasaré con mayor detenimiento en los próximos capítulos— presentan ya una clara orientación financiera y especulativa. Por ejemplo las reformas y la liberalización de los mercados del suelo e hipotecario, el *Decreto Boyer* (Decreto Ley 2/1985) que relanza el mercado de la construcción impulsando una vez más la compra frente al alquiler, las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda o la flexibilización de las condiciones para el crédito (López y Rodríguez, 2010; Palomera, 2011; Rodríguez Alonso y Espinoza Pino, 2017).

Como consecuencia de este repertorio de ajustes institucionales y económicos se fomenta un tipo de intervenciones en el territorio que van a estar en el corazón de la estrategia de acumulación del *boom* inmobiliario y que forman parte constitutiva del modelo de ciudad neoliberal que se consolida durante este ciclo. En primer lugar, utilizar el espacio físico como un medio privilegiado para la rotación del ca-

pital a través del entorno construido, multiplicando los procesos de mercantilización del espacio. Y en segundo lugar, establecer un escenario en el que las administraciones públicas, a todas las escalas, han de competir por la atracción de capitales, expandiendo las lógicas empresariales a la gestión y las políticas públicas urbanas —lo que se conoce como *empresarialismo urbano*—. Los megaeventos como los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla que en 1992 acapararon la atención mediática del país son claros ejemplos de esta lógica de acumulación neoliberal.⁹

La entrada de España en la Unión Europea supuso además la obligatoriedad de cumplir con un paquete de medidas neoliberales fijadas por el Tratado de Maastricht e impuestas como condición para la integración en la futura moneda única. A través del Tratado se diseña un política de convergencia de todos los países miembros hacia tres grandes objetivos (López y Rodríguez, 2010): el control de la inflación, fundamentalmente con políticas de control y estancamiento salarial; la reducción del gasto público y la privatización de empresas públicas; y la bajada de los tipos de interés con la intención de establecer un flujo de crédito hacia las familias y las empresas, fomentando su endeudamiento. Este proceso de sustitución del endeudamiento público por el endeudamiento privado está en la base de la burbuja.

Seguramente el rasgo que mejor define el ciclo financiero-inmobiliario 1995-2007, que popularmente conocemos como burbuja o *boom*, es la centralidad que adquiere el mercado de la vivienda tanto en la dinámica económica nacional como en el plano doméstico. Solo para hacernos una idea de las dimensiones del fenómeno, según José Manuel Naredo y Antonio Montiel (2011), España llega a ser el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de viviendas ocupadas en propiedad, con más del 80% de los hogares poseyendo al menos una. Como vemos, durante este ciclo la vivienda se posiciona aún más como un recurso fundamental para las familias, algo que, si bien actúa sobre el viejo poso de la propiedad, se incentiva todavía más a través de todo un repertorio de políticas —algunas como la reforma del mercado hipotecario, la modificación de la ley del suelo o los planes de infraestructuras son bien conocidas—. Todas ellas tienen como objetivo apuntalar la reforma financiera y territorial que estaba en marcha. Se consigue así, en pocos años, un crecimiento

⁹ La película-documental *El año del descubrimiento* (López Carrasco, 2020) señala cómo, ese mismo año, mientras los dos megaeventos se utilizaban hacia dentro y hacia fuera como la muestra irrefutable de la modernización de una España recién integrada en la Comunidad Económica Europea, se aplicaba una importante reestructuración y destrucción del tejido industrial nacional bajo los mandatos de Europa. Debido al equilibrio de fuerzas entre el Gobierno y las Autonomías, el peso de la reestructuración cayó íntegramente sobre la región de Murcia, especialmente en la ciudad de Cartagena, donde se localizaban las fábricas. El mandato europeo ordenó destruir prácticamente todo el tejido industrial del que vivían no solo los empleados y empleadas de las empresas, sino la ciudad en su conjunto. En 1992, mientras la atención del país estaba puesta en los Juegos Olímpicos y en la Exposición Universal, en Cartagena el movimiento obrero, con un fuerte arraigo local, tomaba el parlamento autonómico.

disparado del precio y del número de viviendas construidas, y también el aumento de la demanda de los bienes de consumo. Tras esta dinámica hay dos elementos que juegan un papel clave: la importancia que históricamente tiene la vivienda en propiedad para las economías domésticas —al actuar como uno de los principales seguros económicos y vitales para las clases trabajadoras desde la época del desarrollismo— y que, por tanto, goza de una relativa extensión por todo el cuerpo social; y los procesos de financiarización de las economías domésticas que en España reposan especialmente sobre lo anterior. Voy a tratar de mostrar la explicación que Isidro López y Emmanuel Rodríguez (2010), desde la economía política, hacen de este fenómeno.

En primer lugar, en el Estado español el principal bien patrimonial que poseen las familias es la vivienda. Desde finales de los años cincuenta, las sucesivas políticas de vivienda, la facilidades para el crédito, las modificaciones de la ley del suelo y la promoción del sector inmobiliario y sus agentes privados tuvieron como principal objetivo extender la propiedad entre la población. Hasta el punto de que, como constataremos en el capítulo 3, para las familias trabajadoras la vivienda no es solo un lugar de residencia, sino también un nicho de estabilidad, tranquilidad y la principal garantía de ahorro y de futuro para las siguientes generaciones. De algún modo, en España el acceso a la vivienda, integrando a la clase trabajadora en la propiedad, ha funcionado como una vía de reproducción social disponible ante la progresiva fragilidad de los salarios. Algo que refuerzan las políticas implementadas durante la larga crisis de los años setenta y ochenta. En segundo lugar, en los años noventa se produce un fenómeno de abaratamiento del crédito a nivel internacional —en cuya expansión juega un papel importante el mencionado Tratado de Maastricht y la disciplina exigida por la unificación monetaria en torno al Banco Central Europeo—. Este fenómeno está en la base de la reorientación internacional del proceso de financiarización de la economía hacia los servicios personales y especialmente hacia el mercado de la vivienda (Fernández Durán, 2006); con las hipotecas, por cierto, como vector principal de dicho proceso.

La fluidez del crédito y las expectativas de revalorización del tejido inmobiliario permiten a las familias, tanto si ya eran propietarias como si no, optar a la compra de viviendas, segundas residencias y a la mudanza a otros enclaves de la ciudad.¹⁰ Eso sí, pasando en la mayoría de los casos por el endeudamiento hipotecario. Por ejemplo en Madrid, muchos habitantes de los barrios de las periferias obreras aprovechan para arreglar su piso, para adquirir otro o para mudarse a otros lugares de la ciudad o a las zonas nuevas de su barrio. Un fenómeno que, como veremos más adelante, es el

¹⁰ Durante los años de prosperidad del ciclo inmobiliario el precio de la vivienda creció en más de un 200 %, llegando a experimentar entre 2002 y 2006 subidas de hasta un 30 % anual (Rodríguez y López, 2010). Para hacernos una idea, el valor del parque inmobiliario madrileño se multiplicó por 3,7 (Rodríguez, García y Muñoz, 2013).

caso de buena parte de los habitantes del PAU de Carabanchel. Las promociones de vivienda unifamiliar, sobre todo adosada, que se extendieron durante los ochenta por los municipios del oeste y noroeste de la Corona Metropolitana de Madrid y que iban dirigidas a sectores más pudientes, empiezan a ser imitadas durante el ciclo de la burbuja en el sur y el este, esta vez para poblaciones de origen trabajador (Díaz Orueta y Lourés Seoane, 2012). En este sentido, algunos PAU madrileños han formado parte de esa difusión entre las clases trabajadoras durante la burbuja de las tipologías residenciales suburbanas antes solo reservadas para sectores con mayor capacidad económica (Gutiérrez Cueli, 2016).

El mecanismo más o menos era el siguiente: la burbuja en el precio de las viviendas genera un incremento del valor del patrimonio de las familias y unas expectativas de revalorización de la vivienda para quien todavía no posee ninguna, y al mismo tiempo las facilidades de crédito —especialmente créditos hipotecarios y créditos destinados al consumo— se apoyan en la propiedad inmobiliaria como garantía y fomentan una espiral de endeudamiento doméstico. Todo ello desemboca en un aumento de los niveles de consumo que se sostiene, en realidad, sobre un crecimiento de la deuda en los hogares y una burbuja del valor inmobiliario. Esto es, un gigante con pies de barro: el efecto riqueza en las familias va de la mano de un crecimiento desproporcionado de su deuda. Por eso en nuestro país el proceso de penetración de las finanzas en las economías domésticas se ha producido utilizando la vivienda como uno de los vectores principales. Se expanden con relativo éxito por el tejido social porque los mecanismos financieros se insertan en una mercancía de primera necesidad como es la vivienda.

Así, siguiendo los análisis de López y Rodríguez (2010), durante el ciclo de la burbuja y en los años precedentes asistimos a una suerte de reinversión del keynesianismo a través del endeudamiento privado. Se consigue una expansión del consumo generando un «efecto riqueza» a través de la revalorización de las viviendas y los activos inmobiliarios de las familias —lo que se conoce como *burbujas patrimoniales*— y el acceso a productos financieros. Es decir, generando consumo y endeudamiento a la vez. A través de esta dinámica se consiguen aumentar los niveles de consumo sin necesidad de incrementar los salarios; es más, en mitad de un proceso histórico de descenso de los salarios y empeoramiento de las condiciones laborales —hablamos de un estancamiento a largo plazo de los salarios reales de al menos el 60% de la población y de un modelo laboral caracterizado por una intensa precarización (López y Rodríguez, 2010; López Calle, Alas-Pumariño y Fernández Gómez, 2019)—. El efecto riqueza causado por la revalorización de los activos inmobiliarios y los patrimonios familiares permite al mismo tiempo sostener la caída continuada de los salarios y la desinversión social del Estado, en un mapa repleto de despojos y privatizaciones neoliberales. Se produce así una relación entre distintos elementos: el estancamiento de los salarios reales, el alcance de la propiedad de la vivienda en la sociedad española

y su revalorización, la facilidad de crédito, la penetración de las finanzas en las economías domésticas y el aumento del consumo y del endeudamiento.¹¹

Esto explica, en parte, que durante los años ochenta y noventa se mantuviera la noción de clase media como una representación con la que amplios sectores de la sociedad se sentían identificados; aun cuando el dismantelamiento del ya débil Estado de bienestar y la adopción de políticas neoliberales habían ido dinamitando las bases materiales de la precaria mayoría social de las clases medias y estas sufrieran un lento deterioro. Todavía en julio de 2014 y en una etapa avanzada de la crisis, según los datos del CIS, el 72 % de los españoles y españolas se situaba en una escala del 1 —muy pobre— al 10 —muy rico— en los escalones centrales 4, 5 y 6 (Hernández, 2014). Aunque es cierto que si observamos la serie «clase social subjetiva» generada por el CIS, encontramos un cierto descenso de la adscripción a la «clase media» a partir del 2012 y un aumento de la «clase media baja», si bien las identificaciones continúan agrupándose en torno a esa identidad dispersa de clase media. Como explicaré más adelante, durante mi trabajo de campo en el PAU de Carabanchel realizado entre 2017 y 2019 me encontré con que la noción de clase media aparecía una y otra vez en los discursos de sus habitantes, sobre todo a la hora de comparar su vecindario con los barrios próximos de la periferia obrera.

Así, en este proceso de evolución del capitalismo español desde los años sesenta —difícilmente asimilable al modelo etapista que suele utilizarse para pensar el proceso de *descomposición de la clase obrera* en los países con fuerte pasado industrial—, existen al menos tres fenómenos interrelacionados que son relevantes para comprender cómo la vivienda en propiedad va adquiriendo un rol clave en las estrategias de reproducción de las familias de origen obrero, en el marco de un largo proceso de transformación de sus medios de reproducción. Son la promoción de la vivienda en propiedad junto con el continuo impulso del sector inmobiliario como eje del sistema productivo, la crisis del trabajo asalariado y la expansión de la financiarización en las economías domésticas y en la vida cotidiana. Estos fenómenos discurren en paralelo a la progresiva neoliberalización del Estado, teniendo como resultado una creciente privatización de la reproducción social.

La adopción por parte de las administraciones de políticas neoliberales se encuentra tras el impulso a la desregulación y precarización del mercado de trabajo, el deterioro y la privatización de los bienes públicos y comunes, y el abandono del compromiso estatal en la provisión de recursos y servicios esenciales para sostener la

¹¹ Según el análisis de López y Rodríguez (2010: 187) de los datos aportados por el Banco de España, entre el 2000 y el 2007 la deuda de las administraciones públicas permanece estable, mientras la de los hogares y empresas se dispara hasta multiplicarse por tres. En solo siete años la deuda de las economías domésticas crece un 200 %. Es interesante observar estos datos al calor de las cifras de préstamos hipotecarios (*op. cit.*: 188). En 2007, por ejemplo, el volumen total de préstamos ascendía a trescientos mil millones de euros. Para el conjunto del periodo 1994–2007, las cifras de endeudamiento hipotecario se multiplican por doce.

vida. Algo que en el caso de España, además, se levanta sobre un poso de desresponsabilización histórica del Estado en el aprovisionamiento de vivienda (Palomera, 2011). Es en este marco de desposesión y fragmentación en el que irrumpen con fuerza las finanzas durante el pasado ciclo de la burbuja, introduciendo mecanismos financieros en los espacios y los medios de reproducción social. Es decir, el proceso de financiarización actúa sobre los procesos previos de expolio y privatización de bienes y servicios, antes socializados, que pasan a ser proporcionados por servicios financieros de acuerdo a una lógica de endeudamiento. Cuestiones como asegurarse una vivienda o una pensión son dos de los nichos sobre los que han penetrado estratégicamente las finanzas, justamente porque se trata de bienes básicos de los que es difícil prescindir, poniendo al servicio de la renta financiera antiguos espacios de la reproducción social. Así, la financiarización de la vida se construye sobre la relativa retirada del Estado como el principal asegurador: se degradan los mecanismos de aseguración colectiva y los derechos sociales, al tiempo que se sustituyen por un proceso de responsabilización individual de la reproducción social que recae sobre los recursos y el endeudamiento de los hogares. Ya que, recordemos, el largo camino de la desregulación laboral ha ido construyendo un marco de precariedad y de crisis del trabajo asalariado como forma de acceso al consumo y de mantenimiento de las economías domésticas obreras. Al compás de la depresión de los salarios ha ido creciendo la deuda en los hogares.¹²

Lo que en otro tiempo constituían derechos sociales que debían garantizarse por el Estado y por estructuras colectivas —en forma de inversión social y políticas sociales, servicios públicos, mecanismos de redistribución, etc.— se convierten poco a poco en una responsabilidad individual. Y mientras se destruyen los mecanismos de aseguración colectiva el Estado va perdiendo su responsabilidad en el proceso de reproducción. Emerge así la solución individualizada, en forma de consumo y endeudamiento, casi como la única opción para hacer frente a la ausencia de servicios, recursos y de estabilidad vital. Se trata, como argumentan las feministas argentinas Luci Cavallero y Verónica Gago (2019), de una suerte de *financiarización de los derechos sociales*, en tanto que las unidades domésticas tienen que recurrir a la mediación de los créditos, el consumo y el endeudamiento para obtener recursos básicos para la reproducción como es la vivienda.

¹² Según exponen Isidro López y Emmanuel Rodríguez (2010: 248-249) —analizando los datos disponibles del Banco de España para el periodo 1995-2007—, en la evolución del balance financiero de las familias los pasivos crecieron más que los activos durante esos años, pero además el 95% del pasivo de las familias correspondía a préstamos concedidos por instituciones financieras, en su mayor parte a créditos hipotecarios para la compra de vivienda. Así, al observar la relación entre la deuda y la renta disponible de las familias encontramos que esta relación toma un perfil casi inverso durante los años de la burbuja. Si en 1995 la deuda representaba el 62% de la renta disponible, en 2008 superaba el 130%. Es decir, el endeudamiento real de las economías domésticas se duplicó.

En este contexto de privatización en las economías domésticas de la responsabilidad y los riesgos de la reproducción social emerge la centralidad de la vivienda en propiedad en las estrategias familiares, renovada durante el pasado *boom*. En este ciclo, mientras el peso del trabajo y el salario disminuía su importancia en la composición de la renta en las familias, aumentaba en forma de burbuja el valor de la vivienda, en un país donde la mayor parte de la población *es o desea ser* propietaria. Se puede decir, posando la mirada en el tiempo largo, que el peso de la propiedad inmobiliaria en el Estado español ha funcionado como un mecanismo de sujeción y, al mismo tiempo, como un bastón para las clases trabajadoras en los diferentes ciclos de acumulación: un bastón para aguantar la progresiva reducción salarial, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la precarización de la vida y el expolio capitalista de bienes públicos y comunes. Tal vez, un resultado del régimen de acumulación desde el desarrollismo sea la construcción de un lugar privilegiado para la vivienda en propiedad entre los medios de reproducción de la clase trabajadora: actuando como seguro para el bienestar presente y futuro, como un medio para mejorar las condiciones de vida y la posición social y también, por paradójico que resulte, como un refugio para las embestidas del capitalismo. Como le decía Violeta a Rosa, mientras charlábamos en una cafetería del PAU de Carabanchel: «En general la gente lo que intenta es mejorar en función de la vivienda». Ese «mejorar en función de la vivienda» condensa, como veremos, no solo una larga historia de políticas y reajustes económicos e institucionales, sino también la constitución progresiva de unas determinadas disposiciones en el espacio social de las clases trabajadoras.

En esta investigación me sitúo en la intersección entre la clase social, el espacio urbano y las políticas neoliberales para acercarme a la generación que, como Violeta y Rosa, nació en las periferias obreras durante la larga crisis de los setenta y ochenta y creció a medida que el proceso de transformación de la clase trabajadora y sus vecindarios iba evolucionando. A mediados de la década de los noventa, muchas de estas personas inician la compra mediante endeudamiento de una vivienda en propiedad y dejan el barrio obrero para mudarse a las nuevas periferias residenciales levantadas por el *boom*. En la etnografía me detengo en un punto de este fenómeno más amplio, en una determinada generación y en un espacio urbano concreto: trato de analizar las *estrategias familiares de reproducción y movilidad social* que los hijos y las hijas de esa crisis de reproducción, nacidas en los barrios de la periferia obrera madrileña, despliegan en el proceso de mudanza al PAU de Carabanchel y en su vida cotidiana en él. Y los complejos vínculos de clase social que en este proceso se ven involucrados.

De este modo, se abren dos grandes interrogantes o líneas que reflexión que recorren el texto y se encuentran entreteljidas con el resto de planteamientos. Parten del largo proceso de transformación de la clase trabajadora y sus modos de reproducción para preguntarse cuál es la relación, en primer lugar, entre dicho proceso y las nuevas

periferias residenciales de urbanizaciones y, en segundo lugar, su relación con los cambios en las identidades individuales y colectivas, donde intervienen con cierto protagonismo en el discurso social las representaciones sobre la clase media. Es decir, qué papel juegan en el proceso de transformación de la clase trabajadora las periferias neoliberales de los PAU —la propia transformación espacial y urbanística de los espacios de vida de la clase trabajadora— y qué características presenta la dinámica de reestructuración de las identidades colectivas que lo acompaña. Seguramente el recorrido que esta etnografía propone por estos dos ámbitos de reflexión parte de una convicción que es preciso explicitar: que las transformaciones experimentadas por los sujetos de clase obrera no pueden o no deben desvincularse de las transformaciones en los barrios periféricos que habitan, y viceversa. Que el espacio social y el espacio físico —el *habitus* y el *hábitat*— se encuentran inextricablemente unidos.

Aunque tal vez no haga su aparición de forma explícita hasta el capítulo 4, en este trabajo hay un intento por emplear una noción de *clase social* constructivista y relacional. En primer lugar, la perspectiva constructivista nos invita entender las relaciones de clase social en tanto construcciones socioculturales históricas y contextuales, y a establecer una diferencia fundamental entre esa realidad empírica de referencia —que tiende al infinito en su amplitud y complejidad y por ello resulta inasible— y el concepto teórico que elaboramos para analizarla —necesariamente limitado, situado, recortado—. En segundo lugar, la perspectiva relacional ofrece un acercamiento a la multiplicidad de propiedades y dimensiones que conforman la clase. Aquí Pierre Bourdieu (1991 [1979]) elabora una propuesta, a contrapelo de las visiones economicistas que sitúan el trabajo y el salario como el elemento fundante y definitorio de la clase social, y niega la existencia de una propiedad que esté por encima de las otras en la configuración de clase. Bourdieu se pregunta por los obreros a los que les gusta la música clásica; por los chicos de familias humildes que, como él, van a la universidad; por los nuevos ricos que amasan fortunas pero no tienen un gusto refinado y no saben de arte; por las maestras de escuela que cuentan con un amplio bagaje cultural pero con poco capital económico... Frente a las posturas esencialistas y sustancialistas —«estructuras simples de orden de la determinación directa», dice—, que construyen relaciones lineales de causa-consecuencia, propone una definición de clase relacional, dinámica e histórica, en la que influyen multiplicidad de factores que además pueden ir cambiando en función de las variaciones en los contextos y de las trayectorias individuales y grupales. Según él, la clase no se define por una propiedad esencial —como los ingresos o la posición en las relaciones de producción—, ni tampoco por un sumatorio de propiedades —origen étnico y nacional, género, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos...—, ni siquiera por una cadena de propiedades ordenadas a raíz de una propiedad fundamental; sino a través de la estructura que resulta de la relación entre todas las propiedades y que confiere su propio valor a cada una de ellas. Todas a la vez, cada una ocupando un peso rela-

tivo en función del *campo*. Podríamos decir entonces que no hay nada completamente independiente a la clase, aunque solo con la clase no pueda explicarse todo. Esta concepción abre un abanico de posibilidades a nivel etnográfico que permite explorar y describir contextos, prácticas y situaciones sociales tan dispares como la situación de las economías domésticas en un vecindario, las trayectorias individuales o familiares en relación con el sistema educativo o a la movilidad residencial, y hasta las interacciones de los sujetos en la vida cotidiana, repletas de automatismos corporales, formas de estar, de hablar y de moverse, que podemos analizar a la luz de las *disposiciones* de clase social, tal y como veremos en detalle en el capítulo 4.

Junto con la dimensión relacional aflora también una dimensión conflictiva o, si queremos, dinámica. Si la clase no es una sola *cosa*, o un conjunto de ellas, y si tampoco es algo que permanezca inmutable y estático, entonces hablamos de relaciones que se encuentran sujetas a luchas y disputas continuas. Luchas por la apropiación de recursos y bienes simbólicos y materiales que permiten mejoras en las condiciones de vida y en la posición social, luchas por nombrar y por nombrarse o por fijar unos usos del espacio y no otros. E. P. Thompson (2012 [1963]: 910), introduciendo esta orientación conflictiva, esboza una imagen que me parece tan bonita como sugerente: «La clase en sí misma no es una cosa, es un acontecer», dice.

Con esta definición de clase en mente —como concepto construido—, y volviendo al amplio proceso de transformación de la clase trabajadora anteriormente descrito, en este trabajo intento evitar la tentación de tomar la clase social, en su dimensión de «clase percibida»,¹³ como una identidad social estable y sujeta necesariamente a posicionamientos subjetivos fuertes. En su lugar, trato de explorar el universo de las contradicciones, los *decirse* y *desdecirse*, los deslizamientos y los cambios en las tomas de posición. Aún recuerdo cómo, leyendo a Didier Eribon (2017) y el (auto)análisis sobre su propia trayectoria social —el hijo de una familia obrera de provincias que ha llegado a los círculos intelectuales parisinos—, me conmoví ante la idea de abrazar las complejidades de la clase trabajadora *realmente existente*, con sus contradicciones, su heterogeneidad y sus cambios a través de las generaciones y del tiempo.

¹³ Me refiero aquí a la representación que los sujetos elaboran sobre su propia realidad social y que, por tanto, forma parte constitutiva de esa misma realidad.